



Junta de Castilla y León

Consejería de Educación
Dirección de Universidades
e Investigación

MEMORIA DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE FIJAN LOS PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS EN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE CARÁCTER OFICIAL Y POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL CURSO ACADÉMICO 2023-2024.

La Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, establece en el artículo 76 que los proyectos de decretos legislativos y de disposiciones reglamentarias de la Junta de Castilla y León se tramitarán conforme a lo establecido en su artículo 75, el cual exige la elaboración de una memoria que ha de acompañar al correspondiente proyecto a la vez que determina su contenido.

La Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública, establece en el artículo 42 que en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, la Administración de la Comunidad actuará de acuerdo con los principios de buena regulación establecidos en la normativa básica estatal y además con los principios de accesibilidad, de coherencia de la nueva regulación con el resto de actuaciones y objetivos de las políticas públicas, y de responsabilidad.

El Decreto 43/2010, de 7 de octubre, por el que se aprueban determinadas medidas de mejora de la calidad normativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, establece en su artículo 3 que la memoria que, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, debe acompañar a cualquier proyecto de disposición de carácter general contendrá, en un único documento, la evaluación del impacto normativo o administrativo, si fueran preceptivos y, en todo caso, cuantos estudios e informes sean necesarios para el cumplimiento de los principios y medidas regulados en los artículos 41 y 42 de la citada Ley 2/2010, de 11 de marzo, debiéndose redactar por el órgano o centro directivo proponente del proyecto normativo de forma simultánea a la elaboración de este.

Teniendo en cuenta el rango y contenido del proyecto de decreto no se considera preceptiva la evaluación de impacto normativo al no darse los supuestos que se establecen en el artículo 4.1 del Decreto 43/2010, de 7 de octubre. En este sentido, al no apreciarse la existencia de una conexión directa e inmediata con la política socioeconómica ni formar parte de esta, no requiere informe del Consejo Económico y Social en los términos del artículo 3.1.a) de la Ley 13/1990, de 28 de noviembre, del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Del mismo modo, tampoco se dan los requisitos establecidos en el artículo 5.1.a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Económico y Social de Castilla y León, aprobado por Resolución día 20 de febrero de 2014 de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, al no considerar que el presente proyecto de decreto posea una especial trascendencia en la regulación de la política socioeconómica de la Comunidad Autónoma.

Su finalidad es, en el marco de lo dispuesto por la normativa vigente y al amparo de las competencias que ésta atribuye a la Comunidad Autónoma, proceder a fijar los precios públicos por servicios académicos en estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y por servicios



Junta de Castilla y León

Consejería de Educación
Dirección de Universidades
e Investigación

complementarios en las Universidades Públicas de Castilla y León para el curso académico 2023-2024, excepción hecha de los precios por los servicios complementarios correspondientes a las pruebas de acceso a la universidad, que serán de aplicación a las que se realicen en 2023.

Para la elaboración de la memoria de este proyecto de decreto se ha seguido la Guía metodológica de mejora de la calidad normativa aprobada por la Orden ADM/1835/2010, de 15 de diciembre, y se han tenido en cuenta los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Asimismo, se han tenido en cuenta el objetivo 2 “Promover una Cultura de diálogo y participación” del Acuerdo 190/2019, de 12 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban medidas de mejora de la regulación en el ordenamiento jurídico autonómico para el periodo 2019 a 2023.

1.- NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DEL PROYECTO.

1.1. Principios de necesidad y eficacia.

Este decreto parte de lo dispuesto en el artículo 57.4 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, que exige que, al regular el presupuesto de las universidades, se incluya en el estado de ingresos aquéllos correspondientes a los precios públicos por servicios académicos y demás derechos que legalmente se establezcan.

A este respecto se especifica en el artículo 57.4.b) de la Ley que *“En el caso de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial, los precios públicos y derechos serán fijados por la Comunidad Autónoma o Administración correspondiente, dentro de un marco general de contención o reducción progresiva de los precios públicos”*.

Por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, corresponde a la Comunidad de Castilla y León fijar los precios públicos por servicios académicos en estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y por servicios complementarios en las Universidades Públicas de Castilla y León para el curso académico 2023-2024, excepción hecha de los precios por los servicios complementarios correspondientes a las pruebas de acceso a la universidad, que serán de aplicación a las que se realicen en 2023.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera plantea los objetivos y procedimientos necesarios que deberán vincular a todos los poderes públicos, en orden a implementar de forma afectiva los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como garantía del crecimiento sostenido, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución Española.

Asimismo, la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario establece en su artículo 57.1 que el presupuesto de las universidades será público, único,



Junta de Castilla y León

Consejería de Educación
Dirección de Universidades
e Investigación

equilibrado, y comprenderá la totalidad de sus ingresos y gastos.

1.2. Principio de proporcionalidad.

Corresponde a la Administración Autonómica aprobar esta norma en virtud de lo dispuesto en el artículo 57.4.b) de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, puesto en relación con el artículo 17 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León que determina que el establecimiento o modificación de estos precios públicos se realizará mediante decreto de la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero competente en materia de universidades.

Este proyecto de decreto contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad que el interés general requiere, la cual no implica la restricción de derecho alguno o la imposición de obligaciones a sus destinatarios.

1.3. Principio de transparencia.

En la tramitación de este proyecto de decreto se va a posibilitar la participación de los ciudadanos en la elaboración de su contenido a través de la plataforma de Gobierno Abierto y se van a llevar a cabo todos los trámites establecidos tanto en la normativa estatal básica como autonómica relacionados con la citada participación.

De conformidad con el artículo 76.1 en relación con el artículo 75.2, de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y con el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de decreto se ha sustanciado la consulta pública a través del Portal de Gobierno Abierto.

De conformidad con el artículo 76.1 en relación con el artículo 75.4, de la Ley 3/2001, de 3 de julio, y con el artículo 16 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, el proyecto de decreto se va a someter a la participación ciudadana a través del Portal de Gobierno Abierto.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 76.1 en relación con el artículo 75.5, de la Ley 3/2001, de 3 de julio, y con el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el proyecto de decreto se va a someter al trámite de audiencia e información pública a través del Portal de Gobierno Abierto.

Según se dispone en el artículo 7.1.a) de la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León, se va a dar conocimiento del proyecto de decreto al Pleno del Consejo de Universidades de Castilla y León, al tratarse de un proyecto de disposición normativa en materia de universidades elaborado por la Comunidad.

Por otro lado, de conformidad con el artículo 7.c) y d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, el proyecto de decreto, así como la memoria e informes que conformen el expediente de elaboración, será objeto de la correspondiente publicación a través del Portal del



Junta de Castilla y León

Consejería de Educación
Dirección de Universidades
e Investigación

Gobierno Abierto.

1.4. Principio de seguridad jurídica.

De acuerdo con todo lo expuesto, queda claro que con este decreto se garantiza el principio de seguridad jurídica enunciado en el artículo 9.3 de la Constitución Española al ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional –no viéndose afectado por ninguna norma dictada en el ámbito de la Unión Europea-. De este modo, genera un marco normativo estable en los términos previstos en el artículo 129.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

1.5. Principio de eficiencia.

Este proyecto de decreto, dado su objeto y contenido, no impone carga alguna a empresas o particulares, ni tampoco cargas administrativas innecesarias ni accesorias a las universidades públicas de Castilla y León ni a los estudiantes.

1.6. Principio de coherencia.

El presente decreto fija para el curso 2023-2024 los precios por estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales y por servicios complementarios en las universidades públicas de Castilla y León, así como como el régimen de exenciones y bonificaciones. La regulación efectuada se acompasa con el compromiso de reducción de precios públicos para situarlos entre los más bajos de España.

Este decreto no tendrá efectos apreciables sobre otras políticas públicas y su regulación se enmarca de forma coherente con el resto del ordenamiento jurídico autonómico.

1.7. Principio de accesibilidad.

En la elaboración del presente texto normativo se ha procurado facilitar la accesibilidad de todos los afectados por ella de modo que sea fácilmente comprensible. Para ello, se ha aplicado lo dispuesto en las Directrices de Técnica Normativa aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, y en las instrucciones para la elaboración de los documentos que se tramitan ante los órganos colegiados de Gobierno de la Comunidad de Castilla y León, aprobadas por Resolución de 20 de octubre de 2014, del Secretario General de la Consejería de la Presidencia.

Se trata de una norma en cuya redacción se ha utilizado un lenguaje sencillo. No existen ambigüedades, ni contradicciones, ni redundancias.

Va a ser objeto de divulgación para su conocimiento por todos los afectados. Así, en aplicación del artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, una vez sea aprobado el decreto será objeto de publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León para que produzca efectos jurídicos. Buscando su mayor divulgación y conocimiento, se incluirá en el Portal de Educación (www.educa.jcyl.es).

1.8. Principio de responsabilidad.



Junta de Castilla y León

Consejería de Educación
Dirección de Universidades
e Investigación

La responsabilidad en la tramitación de este proyecto de decreto corresponde a la Dirección Universidades e Investigación, de conformidad con las competencias atribuidas en el artículo 6.a del Decreto 14/2022, de 5 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, puesto en relación con el artículo 40.d) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León. Corresponde a la Consejera de Educación presentara la Junta de Castilla y León este proyecto de decreto, de conformidad con el artículo 26.1.d) de la Ley 3/2001, de 3 de julio. Asimismo, será la Junta de Castilla y León, la que apruebe este decreto al tratarse de una modificación de precios públicos, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en los artículos 1.1 y 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, este decreto podrá ser recurrido ante el orden contencioso-administrativo, al ser una disposición administrativa de carácter general.

2. CONTENIDO DEL PROYECTO.

2.1. Descripción.

El objeto de este decreto es fijar los precios públicos por servicios académicos en estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y por servicios complementarios en las Universidades Públicas de Castilla y León para el curso académico 2023-2024, excepción hecha de los precios por los servicios complementarios correspondientes a las pruebas de acceso a la universidad, que serán de aplicación a las que se realicen en 2023.

2.1.1. Estructura y contenido.

Este decreto consta de una parte expositiva, 5 capítulos (que comprenden 19 artículos), 3 disposiciones finales y 4 anexos.

2.1.1.1. Parte Expositiva.

Determina el marco jurídico aplicable a este decreto, así como explica la oportunidad de la norma en base a los principios exigidos por el artículo 29 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y por la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública.

2.1.1.2. Parte Dispositiva.

- El capítulo I “Disposiciones Generales”, consta de un artículo (artículo 1) en el que se detalla el objeto del decreto.
- El capítulo II “Precios públicos” consta de 5 artículos (artículos 2 a 6) y regula los precios públicos de las enseñanzas de grado, máster y doctorado, diferenciándose según se trate



Junta de Castilla y León

Consejería de Educación
Dirección de Universidades
e Investigación

de primera, segunda, tercera, cuarta y sucesivas matrículas. Además, en el caso de las enseñanzas de grado, atiende al grupo de enseñanzas. Asimismo regula el precio mínimo aplicable por servicios académicos, y los precios de los servicios complementarios.

- El capítulo III “Precios especiales”, que consta de 3 artículos (artículos 7 a 9), regula una serie de precios especiales aplicables a las materias sin docencia, a los estudiantes de los centros o institutos universitarios adscritos, y a los que obtengan reconocimiento de créditos.
- El capítulo IV “Pago” consta de 2 artículos (artículos 10 y 11) y regula las formas de pago, reconociendo el derecho del estudiante a elegir entre hacer efectivo el pago de estos precios de una sola vez, a principios de curso, o bien a fraccionarlo en tres fechas distintas –en este último caso con algunas excepciones-. Asimismo determina cuáles son las consecuencias del impago.
- El capítulo V “Exenciones y bonificaciones”, consta de 8 artículos (artículos 12 a 19), recoge el régimen de exenciones y bonificaciones aplicables a los premios y menciones, a los estudiantes con discapacidad, a las víctimas de actos de terrorismo, a los estudiantes miembros de familias numerosas, a las víctimas de violencia de género (incluyendo aquí tanto a las mujeres víctimas de violencia de género como a los estudiantes que sean hijos o hijas huérfanos de mujeres fallecidas por violencia de género,) y a los solicitantes y beneficiarios de Protección Temporal a personas afectadas por el conflicto en Ucrania. Igualmente, recoge la compensación a las universidades de los importes de los precios públicos no satisfechos por los estudiantes afectados por las exenciones y bonificaciones previstas.

2.1.1.3. Parte Final.

Tres disposiciones finales:

- Primera. Prórroga del decreto. Prevé la posibilidad de prorrogar los precios establecidos en el decreto en el supuesto de que no se aprueben nuevos precios públicos por servicios académicos en estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y por servicios complementarios en las universidades públicas de Castilla y León.
- Segunda. Desarrollo Normativo. Autoriza a las personas titulares de las consejerías con competencia en materia de hacienda y de universidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de este decreto. Del mismo modo, autoriza a la persona titular de la consejería con competencias en materia de universidades, para poder actualizar la relación de enseñanzas de grado previstas en el Anexo I, en caso de prorrogarse el decreto.
- Tercera. Entrada en vigor. Determina que su entrada en vigor se producirá el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, fecha a partir de la cual podrán percibirse los precios anexos cuando estén relacionados con servicios académicos a prestar durante el curso 2023-2024. Si bien se excepcionan los precios públicos por los servicios complementarios correspondientes a las pruebas de acceso



Junta de Castilla y León

Consejería de Educación
Dirección de Universidades
e Investigación

a la universidad, que se aplicarán a las que se realicen en el año 2023.

2.1.1.4. Anexos.

Los anexos concretan los precios públicos aplicables al curso académico 2023-2024:

- Anexo I: Fija los grupos y los precios de las enseñanzas de grado.
- Anexo II: Fija los precios por enseñanzas de máster, según las actividades formativas y complementos formativos exigidos para la admisión.
- Anexo III: Señala cuáles son los precios de las enseñanzas de doctorado, diferenciando entre la matrícula y las actividades formativas y complementos formativos exigidos para la admisión estructurados en créditos europeos.
- Anexo IV: Determina los precios aplicables a los servicios complementarios diferenciando entre los servicios correspondientes a evaluaciones y pruebas; los aplicables a la expedición de títulos académicos y los correspondientes aderechos de secretaría.

2.1.2. Elementos novedosos que incorpora.

Para determinar los elementos novedosos que este proyecto de decreto incorpora, hay que acudir a su comparación con el Decreto 31/2022, de 7 de julio, por el que se fijan los precios públicos por servicios académicos en estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y por servicios complementarios en las universidades públicas de Castilla y León para el curso académico 2022-2023, cuya derogación propone.

Realizando dicho análisis comparativo, pueden destacarse las siguientes novedades:

1. La reducción en un 8,67% de los precios de las primeras matrículas de grado -Anexo I- respecto a los precios vigentes en Castilla y León en el curso 2022-2023.
2. La reducción en un 18,99% de los precios de los másteres no habilitantes Castilla y León en el curso 2022-2023.
3. La disminución de los precios públicos por los servicios complementarios correspondientes a las pruebas de acceso a la universidad en la fase general ordinaria se cifra en un 16,08%, y en el caso del suplemento por examen en la fase voluntaria (materia opcional) la disminución alcanza el 54,87%, en ambos casos respecto a los precios vigentes en el curso 2022-2023.
4. La exención del pago de precios públicos a los solicitantes y beneficiarios de Protección Temporal a personas afectadas por el conflicto en Ucrania.
5. Adaptación de las fechas para para realizar el pago fraccionado, ajustándolo al calendario de los años 2023 y 2024.



Junta de Castilla y León

Consejería de Educación
Dirección de Universidades
e Investigación

6. En el Anexo I del proyecto, se actualiza el listado de grados cuya implantación se ha autorizado tras la publicación del DECRETO 31/2022, de 7 de julio, por el que se fijan los precios públicos por servicios académicos en estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y por servicios complementarios en las universidades públicas de Castilla y León para el curso académico 2022-2023.

3. ANÁLISIS JURÍDICO. ADECUACIÓN DE LA NORMA AL ORDEN DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS.

3.1 Constitución Española.

El artículo 27 de la Constitución española reconoce, entre otros derechos, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, y la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

De acuerdo con el artículo 149.1.1ª, 15ª, 18ª y 30ª de la Constitución corresponde al Estado en exclusiva la competencia para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; el fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica; las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios y para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

3.2. Marco estatal.

Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, establece en el artículo 57.4. b) que los precios públicos por servicios académicos y demás derechos que legalmente se establezcan en el caso de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial, los precios públicos y derechos serán fijados por la Comunidad Autónoma o Administración correspondiente, dentro de un marco general de contención o reducción progresiva de los precios públicos. Asimismo, prevé que se consignarán las compensaciones correspondientes a los importes derivados de las exenciones y reducciones que legalmente se dispongan en materia de precios públicos y demás derechos.

3.2.1. Marco normativo estatal, aplicable a los precios públicos.

De acuerdo con el 57.4. c) de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, formarán parte del estado de ingresos de las universidades Los ingresos por los precios de las enseñanzas propias, la formación a lo largo de la vida y los referentes a las demás actividades autorizadas a las universidades, que deberán ser aprobados junto con los presupuestos anuales en los que se deban aplicar.



Junta de Castilla y León

Consejería de Educación
Dirección de Universidades
e Investigación

Por su parte el artículo 12 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, dispone que los precios públicos de los títulos universitarios oficiales que ofertan las universidades públicas, los fijarán las Comunidades Autónomas de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Universidades.

3.2.2. Marco normativo estatal aplicable a los estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial.

A través de este decreto, la Comunidad de Castilla y León ha de regular los precios públicos aplicables a los servicios académicos en estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y por servicios complementarios en las universidades públicas de Castilla y León para el curso académico 2023-2024. Estos títulos se obtienen al cursar las siguientes enseñanzas:

- Enseñanzas de grado, reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, derogado por el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, salvo para lo reflejado en sus Disposiciones Transitorias, que continúa siendo de aplicación.
- Enseñanzas de máster reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, derogado por el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, salvo para lo reflejado en sus Disposiciones Transitorias, que continúa siendo de aplicación.
- Enseñanzas de doctorado, reguladas por el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado.

3.2.3. Marco normativo estatal aplicable a las exenciones y bonificaciones.

El artículo 19 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social prevé que *“Las personas con discapacidad, en su etapa educativa, tendrán derecho a la gratuidad de la enseñanza, en los centros ordinarios y en los centros especiales, de acuerdo con lo que disponen la Constitución y las leyes que la desarrollan”*.

El artículo 32. 6 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, reconoce que *“Para garantizar el acceso y la permanencia en los estudios universitarios, las universidades públicas podrán establecer, con cargo a sus propios presupuestos, modalidades de exención parcial o total del pago de los precios públicos y derechos por prestación de servicios académicos que, en cualquier caso, tomarán en consideración la diversidad del núcleo familiar atendiendo a criterios socioeconómicos. El estudiantado con discapacidad y las víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer tendrán derecho a una bonificación total por los servicios académicos”*.



Junta de Castilla y León

Consejería de Educación
Dirección de Universidades
e Investigación

universitarios liquidados en la matrícula en los términos establecidos en la normativa específica y mediante acreditación formal.”

El artículo 12.2.a) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas establece que en el ámbito de la educación *“En todos los regímenes, niveles y ciclos tendrá lugar una exención del 100 por ciento a los miembros de las familias numerosas clasificadas en la categoría especial y una bonificación del 50 por ciento para los de categoría general de las tasas o precios públicos que se apliquen a los derechos de matriculación y examen, por expedición de títulos y diplomas académicos, docentes y profesionales, y cualesquiera otras tasas o precios públicos establecidos en el citado ámbito”*. La disposición adicional segunda prevé que *“Los beneficios establecidos al amparo de esta ley para las unidades familiares que tengan reconocida la condición de familia numerosa tienen la naturaleza de mínimos y serán compatibles o acumulables con cualesquiera otros que, por cualquier causa, disfruten los miembros de éstas”*.

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, se amplió la protección temporal otorgada en virtud de la decisión de ejecución, referida en el párrafo anterior, a personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España.

Ante la situación de emergencia creada por el conflicto en Ucrania se hizo preciso aprobar unas normas complementarias de las previsiones contenidas en el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, aprobado por Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, para el reconocimiento individual de la protección temporal en el supuesto de afluencia masiva de personas desplazadas por el conflicto en Ucrania.

En consecuencia, con lo anterior se aprobó la Orden PCM/169/2022, de 9 de marzo, por la que se desarrolla el procedimiento para el reconocimiento de la protección temporal a personas afectadas por el conflicto en Ucrania.

La protección temporal es un procedimiento de carácter excepcional por el que, en caso de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países, que no puedan volver a su país de origen, se les garantiza protección inmediata y de carácter temporal.

La solicitud de protección temporal autoriza a la persona interesada a permanecer en territorio español y a percibir las ayudas gestionadas por el ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones.

No obstante lo anterior, el objetivo de la respuesta de emergencia a la guerra de Ucrania ha sido cubrir las necesidades básicas de las personas desplazadas en condiciones de dignidad. Es preciso tener en cuenta que, de las 130.000 personas que se estima desplazadas en España, solo una pequeña parte (22.000) ha sido atendida mediante el dispositivo de emergencia o en el sistema de acogida de protección internacional. La mayor parte está empleando sus propios recursos o está recurriendo a redes de contactos (familia, amistades, conocidos...) que haya podido encontrar en España.



Junta de Castilla y León

Consejería de Educación
Dirección de Universidades
e Investigación

La situación en Ucrania sigue siendo volátil e impredecible; cabe la posibilidad de que lleguen nuevos flujos de personas desplazadas en los próximos meses. También es posible que se produzcan desplazamientos hacia España de personas que proceden de Ucrania y que inicialmente se han acogido al estatuto de desplazado en otro Estado Miembro.

Es en este contexto de emergencia, en el que se encuentran los distintos paquetes de medidas establecidos por las diferentes administraciones públicas, donde se incardina la exención del pago de precios públicos regulados en este decreto a las personas solicitantes o beneficiarias de Protección Temporal a personas afectadas por el conflicto de Ucrania.

3.3. Marco Autonómico

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su artículo 73, atribuye a la Comunidad la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal. Específicamente, en materia de enseñanza universitaria, es el artículo 73.3 el que determina las competencias exclusivas de la Comunidad sin perjuicio de la autonomía de las universidades.

3.3.1. Marco normativo autonómico, aplicable a los precios públicos.

Las contraprestaciones por los servicios que prestan las universidades públicas en relación con las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial tienen la consideración de precios públicos, por lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, su establecimiento o modificación se realizará mediante decreto de la Junta de Castilla y León, a propuesta del consejero competente por razón de la materia, previo informe de la consejería competente en materia de hacienda y el resto de los trámites previstos, en su caso, en la legislación sectorial vigente.

3.3.2. Marco normativo autonómico aplicable a las exenciones y bonificaciones.

El artículo 7.1.b) de la Ley 4/2017, de 26 de septiembre, de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León establece que *“1.- Las víctimas del terrorismo están exentas de abonar los precios públicos por los siguientes servicios: ... b) Servicios académicos en estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y por servicios complementarios en las universidades públicas de Castilla y León”*.

El artículo 2.1 de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género de Castilla y León, A los efectos de esta ley se entiende por violencia de género cualquier acto de violencia hacia las mujeres, que se ejerce contra ellas por el hecho de serlo, y que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, incluyendo las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como privada.



Junta de Castilla y León

Consejería de Educación
Dirección de Universidades
e Investigación

Por su parte, el artículo 40.ter de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, tras su inclusión por la Ley 7/2017, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, prevé que *“La Administración de la Comunidad de Castilla y León garantizará el acceso gratuito a los estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como a los servicios complementarios en las universidades públicas de Castilla y León a los estudiantes que sean hijos o hijas de mujeres fallecidas por violencia de género, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente”*. Este precepto es desarrollado por el artículo 9 del Decreto 15/2018, de 31 de mayo, por el que se regula la ayuda económica a huérfanos y huérfanas de víctimas de violencia de género en Castilla y León y el acceso gratuito a estudios universitarios, en el que se concretan las personas beneficiarias y el modo de acreditación.

El 4 de marzo de 2022, se adopta la Decisión de Ejecución (UE) 2022/358 del Consejo, por la que se constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE y con el efecto de que se inicie la protección temporal.

3.4. Tabla de vigencias.

Con la aprobación de esta modificación no se verá afectada ninguna norma, manteniéndose intacta la tabla de vigencias.

3.5. Desarrollo normativo.

Este decreto no precisa de desarrollo normativo posterior, si bien dicha posibilidad sí se recoge en la disposición final primera en caso de que fuese necesario para su aplicación.

4. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.

4.1. Trámite de consulta previa.

De conformidad con el artículo 76.1 en relación con el artículo 75.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, y con el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con carácter previo a la elaboración del proyecto de decreto se ha sustanciado la consulta pública a través del Portal de Gobierno Abierto.

Dicha consulta, que se ha realizado desde el 5 al 15 de diciembre de 2022, se refería al procedimiento para la elaboración de un nuevo decreto donde se fijen los precios públicos por servicios académicos en estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y por servicios complementarios en las Universidades Públicas de Castilla y León para el curso académico 2023-2024.

No se han realizado aportaciones a través del portal.

4.2. Trámite de audiencia y participación ciudadana.

De conformidad con el artículo 76, en relación con el artículo 75.4 de la Ley 3/2001, de 3 de Julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y con



Junta de Castilla y León

Consejería de Educación
Dirección de Universidades
e Investigación

el artículo 16 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de transparencia y participación ciudadana en Castilla y León, se ha sometido el proyecto de decreto a los trámites de audiencia y de participación ciudadana, entre el 3 y el 13 de febrero de 2023, dando conocimiento del proyecto de decreto a través del Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León.

No se han formulado alegaciones dentro del plazo concedido.

4.3. Informes.

El presente proyecto de decreto ha sido dado a conocer a la Comisión Delegada del Gobierno, con fecha 26 de enero de 2023, de conformidad con el Decreto 19/2022, de 26 de septiembre, de creación y regulación de este órgano colegiado.

Con fecha 9 de febrero de 2023 se solicitó informe a la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, en virtud del artículo 17 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla y León. Con fecha 20 de febrero de 2023 esta Dirección General emite informe en el que se hacen constar las cuestiones más relevantes del proyecto de decreto y en el que se refleja, a modo de recomendación, que “en la medida de lo posible, el precio que se fije tienda a cubrir el coste de prestación del servicio”

Con fecha 9 de febrero de 2023 se solicitó informe a la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística, en cumplimiento del artículo 76.2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León. Con fecha 7 de marzo de 2023, esta Dirección General emite informe en el que se hace constar el objeto del proyecto de decreto, su incidencia económico-presupuestaria y en el que se refleja, a modo de recomendación, que “en la medida de lo posible, el precio que se fije tienda a cubrir el coste de prestación del servicio”.

Con fecha de 15 de marzo de 2023, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7.1.a de la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León), se puso en conocimiento del Pleno del Consejo de Universidades de Castilla y León el proyecto de decreto de precios públicos para el curso 2023-2024.

4.4. Participación de las restantes Consejerías.

Se somete a la consulta de las Consejerías de la Junta de Castilla y León con fecha 9 de febrero de 2023, a los efectos de que emitan informe sobre todos los aspectos que afecten a sus competencias.

Responden sin formular alegaciones las Consejerías de Presidencia; de Industria, Comercio y Empleo, de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; de Movilidad y Transformación Digital; de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; de Sanidad y de Cultura, Turismo y Deporte.

La Consejería de Economía y Hacienda ha formulado alegaciones a través de los preceptivos informes de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica y



Junta de Castilla y León

Consejería de Educación
Dirección de Universidades
e Investigación

de la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística, referidos más arriba.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades presenta las siguientes alegaciones:

Respecto al posible impacto del texto, en la infancia y en la adolescencia (artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor) se informa que no se aprecia impacto.

Sin embargo, se propone la inclusión de un nuevo artículo nuevo artículo en el que se contemple una doble exención: En primer lugar, una exención del 100% para los estudiantes que hayan tenido expediente de protección a la infancia en Castilla y León hasta la mayoría de edad y, en segundo lugar, una exención del 50% para los estudiantes hijos o hijas de familias que, en el momento de formalizar la matrícula o solicitar el servicio, tengan acogida una persona menor de edad tutelada por la Junta de Castilla y León o que, siendo mayor de edad, se haya acordado la prolongación de actuaciones.

Se rechaza esta alegación. El artículo 81.3.b de la derogada Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contempla que, dentro del presupuesto de las Universidades, se consignarán las compensaciones correspondientes a los importes derivados de las exenciones y reducciones que legalmente se dispongan en materia de precios públicos y demás derechos. La exención solicitada por la Dirección General de Familias, Infancia y Atención a la diversidad no aparece contemplada en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Asimismo, tampoco se recoge esta exención en la Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia en Castilla y León, por lo que no se puede incluir en el presente decreto.

Por otro lado, las alegaciones sostienen que el proyecto de decreto tiene un impacto positivo en las familias numerosas al recoger, en su artículo 15, una exención total del pago de los precios públicos previstos a las familias numerosas de categoría especial y una bonificada del 50% a las familias numerosas de categoría general, establecida en el artículo 12.2.a) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.

En cuanto al impacto en materia de discapacidad, se afirma que, conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, en la preceptiva memoria se deberá hacer mención al impacto de discapacidad, que en este caso, se considera positivo, por la adopción de medidas que favorecen el acceso, permanencia e inclusión del alumnado con discapacidad en el sistema educativo según se recoge en el artículo 13 “la exención del pago de los precios públicos al formalizar la matrícula o al solicitar el servicio a quienes acrediten ser persona con discapacidad en los términos previstos en el artc.4 del R.D Legislativo de 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley general de derechos de personas con discapacidad y de su inclusión social



Junta de Castilla y León

Consejería de Educación
Dirección de Universidades
e Investigación

- En materia de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, las alegaciones son positivas. Se pondera especialmente la exención del pago del precio público a los hijos e hijas huérfanas de mujeres fallecidas por violencia de género; además, de mantener la exención del pago del precio público para las víctimas de violencia de género. No obstante, se concluye que sería deseable, para futuros cursos académicos, que la memoria incluyese un estudio de la situación de partida de mujeres y hombres aportando datos, desagregados por sexo, sobre el acceso a los estudios universitarios. A través del tratamiento de estos datos se podría concluir si la situación de partida es igualitaria.
- Con relación al uso de un lenguaje no sexista, se destaca que, en el presente proyecto de decreto, siguiendo la línea iniciada ya en proyecto de decreto correspondientes a cursos anteriores, se emplea un lenguaje no sexista que elimina el uso abusivo del masculino genérico y que emplea fórmulas válidas para cualquier persona. De esta manera, se visibiliza el papel que la mujer desempeña en la vida social y económica y su condición de titular de derechos y deberes.
- Por último, las alegaciones sugieren que, en el supuesto de que el texto del decreto de lugar a la creación de algún tipo de registro o de bases de datos que afecte a personas físicas directa o indirectamente, dichos datos deberán estar desagregados por sexo, de conformidad con el artículo 20 de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que dispone que “los poderes públicos deberán incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo” e “incluir nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar

4.5. Informe de Asesoría Jurídica de la Consejería de Educación.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 76 y 75.8 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en relación con el artículo 4.2.b) de la Ley 6/2003, de 3 de abril, reguladora de la Asistencia Jurídica a la Comunidad, se solicitó a la Asesoría Jurídica de la Consejería de Educación el preceptivo informe previo sobre el proyecto de decreto.

Dicho Informe ha sido emitido con fecha 17 de marzo de 2023 y en el mismo no se advierte objeción de legalidad.

4.6. Dictamen del Consejo Consultivo.

Con fecha 31 de marzo de 2023, tuvo entrada en el Consejo Consultivo de Castilla y León, la solicitud del dictamen preceptivo sobre el proyecto de decreto.

Examinada la solicitud, y admitida a trámite el 13 de abril de 2023, la Sección Segunda del Consejo Consultivo se reunió en Zamora el día 4 de mayo de 2023 y emitió, por unanimidad, el Dictamen 146/2023, al respecto del presente proyecto de decreto, en el



Junta de Castilla y León

Consejería de Educación
Dirección de Universidades
e Investigación

que se hacen las siguientes consideraciones jurídicas:

4.6.1. Competencia del Consejo Consultivo.

La Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, en su artículo 4.1.d) califica como preceptiva la consulta para el supuesto de proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de leyes, así como sus modificaciones.

En el presente caso, corresponde a la Sección Segunda la competencia para emitir el dictamen, según lo establecido en el apartado tercero, 2.a) del Acuerdo de 6 de marzo de 2014, del Pleno del Consejo, por el que se determina la composición y competencias de las Secciones.

4.6.2. Contenido del expediente y procedimiento de elaboración.

El artículo 50.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo dispone que la solicitud de dictamen se acompañará del expediente administrativo foliado y deberá incluir toda la documentación y antecedentes necesarios para dictaminar sobre las cuestiones consultadas, así como el borrador, proyecto o propuesta de resolución. A la documentación y antecedentes se acompañará un índice numerado de documentos.

Para el presente proyecto de decreto, se considera documentación necesaria la que, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, se recoge para los anteproyectos de ley en el artículo 75.3 de la misma. Asimismo, se señala que no es aplicable la nueva redacción de los artículos 75, 76 y 76 bis de la Ley 3/2001, dada por la Ley 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, porque tal regulación no ha entrado aún en vigor, de acuerdo con el apartado 3 de la disposición final vigesimoprimera de la citada Ley 1/2021, de 22 de febrero.

Examinada la documentación enviada y el proyecto de decreto, el Consejo Consultivo dictamina las siguientes salvedades respecto a su tramitación:

Respecto a los trámites de participación ciudadana, de audiencia y de información pública, por un plazo de diez días naturales, señala que se ha cumplido dicho trámite, pero recalca que el plazo concluyó a las 14:00 horas del último día otorgado para ello. Dado que las sugerencias y observaciones deben presentarse a través del Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León y que este está habilitado durante las 24 horas del día, se advierte que la participación ciudadana no debe limitarse hasta las 14:00 horas, sino que debería extenderse hasta las 23:59 horas del último día natural.

En lo relativo a su puesta en conocimiento el Consejo de Universidades de Castilla y León, resalta la conveniencia de incorporar en el expediente, no sólo el certificado que acredita la celebración de la sesión del Pleno del Consejo de Universidades, sino también del acta de la misma.

Finalmente, hace constar que se han cumplido con el resto de los trámites necesarios



Junta de Castilla y León

Consejería de Educación
Dirección de Universidades
e Investigación

para su elaboración.

4.6.3. Competencia y rango de la norma proyectada.

En el dictamen se señala el marco competencial ejercido por la Junta de Castilla y León para elaborar el proyecto de decreto, e informa que la aprobación del decreto compete también a la Junta de Castilla y León, de acuerdo con la potestad reglamentaria que le atribuye el artículo 16.e) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, dictado en desarrollo de la normativa básica estatal.

4.6.4. Observaciones al texto del proyecto de decreto.

El Dictamen, en este punto, señala que el proyecto de decreto merece un juicio favorable, en la medida que ha podido comprobarse que todas las observaciones realizadas por este Consejo en los Dictámenes 204/2021, de 4 de junio, y 344/2022, de 22 de junio, sobre los proyectos normativos para la fijación de precios públicos universitarios para los cursos 2021/2022 y 2022/2023, se han acogido en el texto sometido a este dictamen, lo que debe ser destacado.

4.7. Adaptación a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema universitario.

Con fecha 12 de abril de 2023, ha entrado en vigor la Ley Orgánica 2/2023 de 22 de marzo, del Sistema Universitario, derogando expresamente la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La nueva norma no afecta a la materia regulada por este decreto, si bien, su entrada en vigor obliga a eliminar las referencias a la ley derogada e incluir las referencias al nuevo texto legal, lo que en la práctica supone, además, eliminar también todas las referencias a la locución “validez en todo el territorio nacional” de los títulos de carácter oficial, dado que la nueva norma no contiene tal referencia en su artículo 57.4.b); si bien, el artículo 8.1 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, establece que los títulos universitarios de Grado, Master Universitario y de Doctorado tienen carácter oficial y son válidos en España.

5. IMPACTOS PRECEPTIVOS:

5.1. Impacto presupuestario.

De conformidad con el artículo 76 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, este proyecto de decreto, como disposición de carácter general, requiere la elaboración de un estudio sobre su repercusión y efectos en los presupuestos generales de la Comunidad y de las previsiones de financiación y gastos que se estimen necesarios.

La presente norma, y su aplicación práctica, se adecúa a las disponibilidades presupuestarias y al escenario presupuestario plurianual previsto para la financiación de las universidades públicas, para en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de



Junta de Castilla y León

Consejería de Educación
Dirección de Universidades
e Investigación

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en el artículo 57 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, conseguir la sostenibilidad y el equilibrio del sistema de financiación universitario.

Con este marco se establece un esquema de precios públicos por servicios académicos que garantiza el necesario equilibrio presupuestario de las universidades. Esta medida, por una parte, sitúa el precio de las matrículas en una horquilla situada en torno al 15-18% del coste efectivo del servicio y, por otra, permite a las universidades mantener la suficiencia financiera sin una pérdida de calidad en el servicio público.

La disminución de las primeras matrículas de Máster no habilitante se cifrará en un 18,99% respecto a los precios vigentes en Castilla y León en el curso 2022-2023.

La disminución de las primeras matrículas de grado se cifra en un 8,67% respecto a los precios vigentes en Castilla y León en el curso 2022-2023.

La disminución de los precios públicos por los servicios complementarios correspondientes a las pruebas de acceso a la universidad en la fase general ordinaria se cifra en un 16,08%, y en el caso del suplemento por examen en la fase voluntaria (materia opcional) la disminución alcanza el 54,87%, en ambos casos respecto a los precios vigentes en el curso 2022-2023.

Por otra parte, el resto de los precios previstos en el decreto se mantienen igual a como estaban previstos en el decreto anterior.

El coste anual de estas medidas se estima en 5M €. De ellos, en función de los plazos de cobro de las matrículas por las universidades, 3,4 M € corresponden al ejercicio 2023, y el resto a 2024. El coste de la disminución de los precios públicos de los grados se estima en 3,7 M€. El coste de la disminución de los precios públicos de los másteres no habilitantes se estima en 900.000€. El coste de la disminución de los precios públicos de los servicios complementarios correspondientes a las pruebas de acceso a la universidad se estima en 400.000 €.

Dichas cuantías se imputarán a la partida 0704.322B01.44021 de los Presupuestos Generales de la Comunidad, sin que ello suponga incremento del presupuesto de gastos de la Consejería.

5.2. Impacto por razón de género.

5.2.1. Fundamentación y objeto del informe de evaluación del impacto de género.

- Contexto normativo:

La Ley 1/2003, de 3 de marzo, de igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León y la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, establecen que los poderes públicos de esta comunidad garantizarán la aplicación de la perspectiva de género en las fases de planificación, ejecución y evaluación de las políticas llevadas a cabo por las distintas Administraciones Públicas.



Junta de Castilla y León

Consejería de Educación
Dirección de Universidades
e Investigación

En base a ello, la Ley 1/2011, de 1 de marzo, de evaluación del impacto de género de Castilla y León, establece que debe evaluarse el impacto de género de todos los anteproyectos de ley, disposiciones administrativas de carácter general, así como planes que, por su especial relevancia económica y social se sometan a informe del Consejo Económico y Social y cuya aprobación corresponda a la Junta de Castilla y León, concretándose dicha evaluación en la realización de un informe, dando así desarrollo a la Orden ADM/1835/2010, de 15 de diciembre, por la que se aprueba la Guía metodológica de mejora de la calidad normativa, que especifica que todos los proyectos normativos deben acompañarse de una memoria en la que se plasme, entre otras cosas, el impacto de género que la misma pudiera causar.

Por otro lado, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece en el artículo 15 que el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, informará con carácter transversal la actuación de los poderes públicos.

- Objeto del informe:

En base a todos estos requerimientos, se realiza el presente informe con el objeto de evaluar el efecto potencial que el proyecto de decreto objeto de evaluación puede causar sobre la igualdad de género.

5.2.2. La pertinencia de género de la norma.

El objeto del proyecto y ámbito de aplicación del decreto es el establecimiento de los precios públicos por servicios académicos en estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y por servicios complementarios en las universidades públicas de Castilla y León para el curso académico 2023-2024.

- **Destinatario:** En función de su contenido el proyecto de decreto tiene como destinatarios finales a mujeres y hombres que vayan a cursar enseñanzas de grado máster o doctorado en el curso académico 2023-2024.
- **Influencia en el acceso/control de recursos o servicios:** El importe de los precios por enseñanzas propias, cursos de especialización y demás actividades autorizadas a las universidades no hace distinción alguna por cuestión de género ni es susceptible de modificar la situación de mujeres y hombres.
- **Influencia en la modificación del rol y los estereotipos de género:** Dado el objeto y contenido del proyecto de decreto, la norma resulta ser muy positivo desde el punto de vista de género, en relación con la incorporación de la exención prevista en el artículo 16, que constituye la aplicación del artículo 40.ter de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género en Castilla y León, para estudiantes que sean hijas o hijos huérfanos de mujeres fallecidas por violencia de género. Así mismo, mantiene la exención ya prevista en el anterior Decreto, relativas a las víctimas de violencia de género.

En todo caso, se ha procurado utilizar un lenguaje no sexista en la redacción del texto



Junta de Castilla y León

Consejería de Educación
Dirección de Universidades
e Investigación

normativo, utilizando en la medida de lo posible el uso de términos o expresiones que incluyen ambos sexos, de conformidad con el artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de efectiva de mujeres y hombres, sobre la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo, y el artículo 45 de la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León, en el que se establece que las Administraciones Públicas de Castilla y León pondrán en marcha los medios necesarios para asegurar que toda norma o escrito administrativo respete en su redacción las normas relativas a la utilización de un lenguaje no sexista.

5.3. Impacto por discapacidad, en la infancia y en la adolescencia, y en la familia.

- Impacto por discapacidad:

De conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, los proyectos de disposiciones administrativas de carácter general deberán incorporar, por la consejería competente en materia de servicios sociales, un informe sobre su impacto.

A estos efectos, el borrador del decreto propuesto tiene un impacto positivo en materia de discapacidad, por la adopción de medidas que favorecen el acceso, permanencia e inclusión del alumnado con discapacidad en el sistema educativo, al recoger, en el artículo 13, la exención del pago de los precios públicos al estudiante que acredite ser una persona con discapacidad en los términos previstos en el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

- Impacto en la infancia y en la adolescencia:

De conformidad con el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, las memorias del análisis e impacto normativo que deben acompañar a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia.

A estos efectos, no se aprecia impacto.

- Impacto en la familia:

De conformidad con la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la familia.

A estos efectos, dado su objeto y destinatarios, se considera que el proyecto de decreto tiene un impacto favorable sobre las familias al recoger, en su artículo 15, la bonificación y exención de precios previstas para las familias numerosas contemplado en el artículo 12.2.a) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.



Junta de Castilla y León

Consejería de Educación
Dirección de Universidades
e Investigación

5.4. Análisis de contribución a la sostenibilidad y la lucha o adaptación contra el cambio climático.

De conformidad con lo establecido en el anexo II del Acuerdo 64/2016, de 13 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban medidas en materia de desarrollo sostenible en la Comunidad de Castilla y León, dentro del objetivo “Integrar la sostenibilidad y el cambio climático en los procesos de toma de decisiones”, como medida incluida en su letra a), los proyectos de decreto deberán incorporar en sus memorias un análisis de su contribución a la sostenibilidad y a la lucha/adaptación contra el cambio climático.

A estos efectos, tras la evaluación del proyecto de decreto en el marco y términos indicados, la contribución a la sostenibilidad y a la lucha o adaptación contra el cambio climático ha de considerarse nula en atención a su contenido y, por tanto, su impacto neutro.

5.5. Impacto administrativo.

El Decreto 43/2010, de 7 de octubre, en sus artículos 5 y 6, exige un estudio de impacto administrativo en la elaboración de aquellas disposiciones de carácter general que regulen nuevos procedimientos o que modifiquen preceptos relativos a procedimientos administrativos ya existentes o que aprueben aplicaciones de administración electrónica.

El proyecto de decreto objeto de esta memoria no regula ningún nuevo procedimiento, ni modifica norma alguna, por lo que no es necesario realizar ese estudio.

Valladolid, a fecha de firma electrónica

LA DIRECTORA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Fdo.- Blanca Ares González.